

Propuestas para un Foro de Economistas de Izquierda

Claudio Katz

Un grupo de economistas resolvió propiciar la constitución de un Foro de Economistas de Izquierda (FOREI) a fin de alentar la elaboración de propuestas concretas frente a la crisis actual.

Un grupo de economistas hemos resuelto propiciar la constitución de un Foro de Economistas de Izquierda (FOREI) a fin de alentar la elaboración de propuestas concretas frente a la crisis actual. Estas iniciativas estarán regidas por el principio de castigar a los banqueros y empresarios que fundieron al país y permitir que los trabajadores, desocupados, profesionales y pequeños productores, ahorristas y comerciantes reconstruyan la economía nacional al servicio del pueblo.

Entendemos que la crisis en curso no tiene precedentes y su resolución exige medidas de transformación total de la estructura productiva, las relaciones de propiedad y el régimen social vigente. Esta debacle supera ampliamente los precedentes de 1975, 1981 o 1989, porque la pobreza, el desempleo, el desmantelamiento industrial y la desintegración regional impiden el logro de rápidas mejoras mediante la aplicación de medidas tradicionales de política económica anticíclica. La depresión actual no es un resultado exclusivo de la “convertibilidad”, el “modelo” o la “apertura”. Expresa el efecto combinado de tres procesos: las convulsiones periódicas del capitalismo, la inserción periférica dependiente y la política neoliberal de la última década. Las salida de la crisis exige actuar conjuntamente sobre estas tres causas determinantes del drama económico argentino.

Nuestra iniciativa se hace eco de la revuelta popular que tumbó al gobierno hambreador y que continúa a través de las protestas y cacerolazos cotidianos. Participamos activamente en la movilización popular y rechazamos el régimen político actual, que se basa en el gobierno por decreto al servicio de la clase dominante, en la delegación legislativa de poderes a los ejecutores del ajuste y en el mantenimiento de los jueces que garantizan impunidad a los saqueadores del tesoro nacional. Apoyamos las manifestaciones que han comenzado a golpear las puertas de los bancos y de las empresas privatizadas y alentamos la discusión de soluciones a la actual catástrofe social en las asambleas populares que surgen en distintos barrios y localidades. Nuestro punto de partida es la oposición total a las medidas que está implementando el gobierno ilegítimo que surgió de un contubernio en la Asamblea Legislativa. Las siguientes caracterizaciones delimitan la orientación de nuestras propuestas y constituyen una primera aproximación al programa que buscamos propiciar.

1) La devaluación fue dispuesta para perpetrar una nueva transferencia regresiva de los ingresos a favor de la clase dominante y su efecto se traducirá en el encarecimiento de los alimentos, los remedios y los bienes de consumo básicos. Si la cotización del dólar libre continúa disparándose comenzará una escalada inflacionaria que provocará mayores sufrimientos al pueblo. El panorama es ya aterrador, porque los 14 millones de pobres con ingresos familiares inferiores a 460 pesos mensuales incluyen 4,5 millones de indigentes que apenas pueden adquirir una canasta de alimentos esenciales valuada en 70 pesos. Se estima que si el aumento de los precios llega al 10% el número de pobres se ampliará en 1,3 millones de personas y si el incremento trepa al 30% la nueva pauperización afectará a 3,7 millones de habitantes.

Semejante descenso al infierno de la miseria no puede ser atenuado por el gobierno devaluacionista que precipitó la nueva escalada de sufrimientos populares. Sus medidas de control de precios son inefectivas y solo aumentan el desabastecimiento de bienes e insumos indispensables. La especulación cambiaria reapareció a pleno y es financiada por el propio Banco Central con la venta subsidiada de divisas a las casas de cambio. Las disposiciones para limitar el desempleo encareciendo los despidos resultan insustanciales en el marco de la hiper-desocupación actual y del contexto de congelamiento salarial, que aprueban las bancadas mayoritarias del parlamento.

El “seguro de empleo y formación” de 150 pesos que prepara el gobierno es una burla de la demanda de 450 pesos que se planteó en la reciente consulta popular. En nuestra opinión la eliminación inmediata de la pobreza es factible, pero depende de una reorganización planificada de la producción y de una redistribución contundente del ingreso y no de expectativas en la futura reinversión empresaria. Serán los propios trabajadores y no la clase dominante los artífices de un “círculo virtuoso de crecimiento” favorable al pueblo.

Frente a la dramática situación actual nuestra propuesta es sencilla y contundente: establecer un inmediato seguro de desempleo de 500 pesos, mientras se reduce la jornada laboral, se reparten las horas de trabajo existentes y se contratan nuevos empleados.

Esta medida junto a la fijación de un salario mínimo y universal de 600 pesos permitiría comenzar a recomponer el poder adquisitivo, en la perspectiva de alcanzar a la brevedad un piso salarial equivalente al costo de la canasta familiar de 1030 pesos. Además, las jubilaciones mínimas deben ser elevadas a 450 pesos y este monto debe alcanzar también a todas las personas mayores de edad que carecen de cobertura de la seguridad social. Por supuesto que se plantea el problema de la financiación de estas medidas.

Proponemos tres vías de recaudación de los fondos requeridos para este plan: la suspensión total del pago de la deuda externa, el establecimiento de impuestos inmediatos a las grandes fortunas y la restauración de los aportes previsionales. En los últimos presupuestos nacionales se contemplaban 9000 millones de pesos anuales para el pago de la deuda y esta cifra supera los 5000 millones en la propuesta elaborada para el 2002.

En materia impositiva se puede establecer un gravamen equivalente al 10% del capital de las cien empresas de mayor facturación y otro 5 % a las compañías con ventas superiores a los 5 millones de pesos. En los casos necesarios y para impedir elusiones el impuesto sobre el capital será sustituido por un supletorio extraordinario a las ganancias de las empresas. Asimismo, proponemos una tasa del 30 % sobre el capital radicado en el exterior que no tenga carácter de inversión directa, afectándose los bienes registrados en el país para el cumplimiento de esta obligación. Estos gravámenes permitirían recaudar 20.000 millones de pesos.

En tercer lugar promovemos la inmediata eliminación de las AFJP y el establecimiento de un sistema único de jubilaciones solidarias en base a la restauración de los aportes patronales, que facilitará la recuperación de 4000 millones de pesos anuales para el fisco. De la suma de estas tres fuentes de financiamiento, junto al conjunto de medidas que se exponen en este documento surgirán los fondos iniciales para enfrentar la emergencia social.

2) El corralito que instauró Cavallo para socorrer a los banqueros a costa de los pequeños ahorristas se ha convertido ya en un inocultable instrumento de expropiación de la clase media. Para proteger a los bancos se paralizó primero toda la actividad financiera y se reforzó luego el cerrojo con mayores limitaciones a la extracción de fondos. El calendario

de devolución del dinero que se prometió en varias cuotas y a lo largo de mucho tiempo tampoco será respetado. El gobierno mantiene la inflexibilidad del corralito porque su prioridad es el auxilio de los financistas que vaciaron el país.

Duhalde mintió al prometer que los depósitos serían “devueltos a su moneda original”. De los bancos ya no sale un solo dólar y es inminente la pesificación forzosa de todos los depósitos, es decir su confiscación explícita. Cuánto más trepa la cotización del dólar más se afianza la estafa a los pequeños ahorristas, que recibirán pesos devaluados o certificados desvalorizados por las sumas que entregaron a los bancos. Un primer cálculo que hemos realizado de esta expropiación en términos financieros indica que rondaría el 50% del valor actual de los depósitos, es decir 23.000 millones de dólares.

Las entidades financieras pueden responder por los depósitos, pero nadie se lo ha exigido y se aprovechan de esta impunidad. Los bancos fueron el canal de fuga de 23.000 millones de dólares que salieron del país e en 2001 por medio de clásicas transferencias y según se ha denunciado también a través del desplazamiento físico de billetes. La mitad de todos los depósitos inmovilizados pertenecen a bancos extranjeros, cuyas casas matrices deberían enviar de inmediato los fondos que recibieron sus sucursales. El patrimonio de las entidades foráneas en el país que superaría los 6200 millones de dólares debería ser puesto inmediatamente a disposición de los ahorristas, así como el fondo de garantía constituido por medio del encaje.

Se afirma que ningún sistema bancario resiste la salida masiva de depósitos, pero esta emergencia fue conocida por el gran público cuándo ya habían salido todos los dólares de los grandes capitalistas. Los bancos tienen que responder por este desfaldo y pueden hacerlo. Si exigieran la devolución anticipada de los créditos otorgados a los 1221 grandes deudores que monopolizan la mitad de todos los préstamos habría dinero para salir del corralito.

Lo que no puede tolerarse es su impunidad y por eso proponemos la sanción de una ley que intime a los bancos a la devolución inmediata de los depósitos.

Se afirma que frente a esta exigencia, las entidades extranjeras se irían del país y las nacionales se declararían en quiebra. Si optan por este camino habría que proceder a la inmediata confiscación de todos los bienes vinculados a estas instituciones. Quiénes se van deberán dejar todos sus activos incluyendo las propiedades directas, encubiertas y asociadas

3) Proponemos la expropiación y no la clásica estatización de la banca, que siempre ha servido para transferir el costo del salvataje de los financistas al conjunto de la sociedad. Este último socorro prepara el gobierno a través de una reforma de la carta orgánica del Banco Central, que le otorga plenos poderes a esta institución para emitir dinero en auxilio de los banqueros. Esta solución es tan nefasta como la extranjerización completa (“off-shorización”) que promueven otros grupos financieros, porque su costo será descomunal para el país. El socorro a los bancos insumió un gasto equivalente al 25% del PBI mexicano luego de la crisis de 1994, del 16 % del PBI coreano y del 40% del PBI indonesio luego de desplome asiático de 1997-98. En el caso argentino ya hubo un precedente cercano luego del tequila, pero en el estado actual de las finanzas públicas este rescate propinaría el tiro de gracia a la economía nacional.

En la actualidad los banqueros norteamericanos, españoles y argentinos libran una dura batalla por apropiarse de la estructura financiera que emergería de una depuración solventada con los fondos públicos. Nuestra propuesta frente a este nuevo despojo es la nacionalización de los bancos y la exclusión del sector privado de toda participación en este circuito estratégico. La catastrófica experiencia que estamos padeciendo refuta cualquier

identificación de las privatizaciones bancarias con la transparencia, eficiencia y la seguridad. Nuestro proyecto de nacionalización incluye la propiedad mediante su traspaso al estado sin ningún tipo de indemnizaciones. El nuevo sistema no puede limitarse -como en los años 70- a la centralización de los depósitos y la supervisión de los créditos, porque esta forma de gestión alimenta la re-privatización y la consiguiente secuencia de descalabros financieros.

4) La otra cara del corralito incluye a la masa de individuos que se endeudaron para comprar algún bien. Pero el grueso de los deudores son empresas, que al cabo de cuatro años de depresión enfrentan graves dificultades para pagar los créditos que obtuvieron. El gobierno afirma que la cobranza acelerada de estos préstamos para liberar el corralito provocaría la quiebra generalizada de las empresas y el consiguiente aumento de la desocupación. Basta observar el desplome del 6,2% de la producción industrial en el 2001 o la brusca reducción de la estimación del PBI per capita luego de la devaluación (de 8000 a 4000-5700 dólares), para mensurar el posible efecto de un cobro estricto y anticipado de las grandes deudas vigentes. Ya el año pasado los concursos preventivos aumentaron 20% y los signos de cesación de pagos privados por parte de las grandes empresas -que tienen deudas externas superiores a 50.000 millones de dólares- preanuncian una espectacular escalada de convocatorias. Pero si las empresas quiebran: ¿quién debe pagar los platos rotos? ¿Sus dueños o el resto de la sociedad? ¿Quién es responsable de la caída, los propietarios o los empleados?

Cómo en el caso de los banqueros, el gobierno se dispone a obligar al pueblo a pagar también esta factura. Ese es el propósito de las modificaciones introducidas a la ley de quiebras, cuyos beneficios originalmente limitados a la pequeña empresa se extenderían ahora a todas las compañías. Los hombres del gobierno trabajan para generalizar la licuación de pasivos iniciada con la devaluación. Los destinatarios de la “nueva alianza productiva” propuesta por Duhalde son Macri, Soldati, Eurenkian, Techint, Bridas, Perez Companc y todos los grupos que hicieron fortunas limpiando en los 80 sus pasivos con el proceso inflacionario. Gran parte de los capitalistas que vendieron sus empresas en la última década e invirtieron en el exterior se preparan, además, para liderar el negocio de la compra devaluada de activos.

Todos estos grupos negocian en secreto y al más alto nivel la pesificación de sus deudas, esperando el momento apropiado para sancionar las leyes que convaliden esta estafa.

Mientras se organiza este salvataje, el gobierno dejó de lado a todos los deudores no bancarizados provocando todo tipo de arbitrariedades entre la clase media endeudada por la compra de un departamento, un auto o material de trabajo. A los pequeños deudores les espera la misma confiscación que a los pequeños acreedores, porque forman parte del mismo sector golpeado por un gobierno que se ha fijado el objetivo de socorrer a las grandes empresas capitalistas.

Frente a esta situación proponemos que los industriales reciban el mismo trato que los banqueros, es decir que respondan con su patrimonio, sus inversiones en el exterior, sus fortunas personales y sus testafierros por las deudas que mantienen con los bancos. Debe procederse a la cancelación anticipada de los créditos de las grandes compañías que concentran la mitad del total de los préstamos del sistema. Si la empresa amenaza con cierres y despidos debe ser nacionalizada e incorporada a un nuevo sector público de propiedad colectiva y gestión democrática bajo control de los trabajadores y el pueblo. Al cabo de una década de privatizaciones la industria nacional quedó despedazada y proponemos que su reconstrucción se desarrolle bajo la gestión pública y en torno a planes

racionales, basados en claras prioridades de inversión, ahorro y consumo, democráticamente discutidos y aprobados por la población. Este camino permitirá, además, una acelerada reducción de la tasa de desempleo y la consiguiente conversión de los seguros de desempleo en ingresos salariales.

5) La cesación de pagos en que se encuentra la Argentina confirma la total inutilidad del sacrificio realizado por el pueblo durante años para cumplir con los pagos de la deuda pública. Está a la vista la imposibilidad de hacer frente a vencimientos de intereses que triplicaban los gastos de administración del gobierno e insumía seis veces más fondos que la asistencia social y 23 veces más recursos que los planes de empleo. Además, ya no pueden ser refinanciados con nuevas privatizaciones porque el patrimonio del estado ha sido totalmente rematado.

Numerosas investigaciones demuestran que el grueso de la deuda fue en su origen fraudulenta y careció de contrapartida en inversiones productivas, es decir que fue el resultado de maniobras especulativas que enriquecieron a los acreedores y a sus socios locales. Por eso reiteramos aquí el reclamo básico, ya compartido por gran parte de la población de una suspensión inmediata de los pagos de la deuda. Esta medida debe ser complementada con el abandono de todas las negociaciones con el FMI, el desconocimiento definitivo de todos los pasivos fraudulentos, la renegociación de líneas de crédito vinculadas a transacciones comerciales prioritarias y el establecimiento de un sistema futuro de pago sólo acotado a los pequeños tenedores nacionales de títulos. Todas las alternativas que se han ensayado para evitar esta salida llevaron al desastre actual. El plan Brady y las sucesivas reducciones de intereses y ampliaciones de los plazos de pago sólo condujeron a engrosar el pasivo y a condicionar toda la actividad económica a exigencias de los acreedores.

Este mismo camino está recorriendo nuevamente el gobierno, cuándo en pleno default acelera las negociaciones con el FMI para fijar un nuevo cronograma de pagos. Buscan retomar el rumbo que trazó Cavallo con el canje de los títulos en manos de los acreedores externos y el reconocimiento de los nuevos bonos entregados a las AFJP y los bancos locales. Para asegurar este continuismo Duhalde ha colocado al frente del Banco Central a un representante directo del FMI.

Se afirma a veces que mantener abiertas estas tratativas con los acreedores no tiene ningún costo para el país, porque el default impide de hecho cualquier pago de intereses. Pero el condicionamiento que generan estas negociaciones es tan gravoso como el cumplimiento de la deuda, ya que obliga a pasar de un ajuste a otro. El “plan creíble” que reclama Bush y los presidentes europeos implica mayores recortes presupuestarios y la flotación cambiaria, es decir rebajas salariales y carestía, a cambio de una refinanciación de la deuda semejante al blindaje y al magacanje que instrumentó Cavallo.

A esta altura resulta indispensable reconocer que las dificultades que ocasionaría el desconocimiento de la deuda serían muy inferiores a los padecimientos que genera la continuidad de su pago.

¿Qué escenario peor al actual podría desatar una moratoria? ¿Mayor corte del crédito internacional interrumpido desde hace más de un año? ¿Mayor ausencia de inexistentes inversiones? ¿Mayor aumento del riesgo país? ¿Incautación de los irrelevantes bienes públicos en el exterior? Todos los fantasmas anunciados ante un eventual desconocimiento de la deuda ya se han materializado por haber evitado esta decisión. Llegó el momento de iniciar otro camino: una emancipación de los acreedores que contará con la solidaridad de todos los pueblos del mundo sometidos a las mismas cadenas del endeudamiento. La

sublevación popular que existe en nuestro país ha provocado una gran conmoción internacional y un gran temor al “contagio político del ejemplo argentino” entre los acreedores. Estas condiciones favorecen la implementación inmediata de la decisión soberana del no pago.

6) El desconocimiento de la deuda permitiría una reformulación total del nuevo presupuesto 2002, debatido por la población y sin ninguna supervisión de técnicos del FMI. El proyecto oficial abandona el “déficit cero”, pero no el principio de ajustar sueldos, jubilaciones y partidas provinciales en función de la recaudación, porque contempla la prioridad de pago de 5.275 millones de pesos de intereses de la deuda a organismos internacionales y acreedores locales. Por eso convalida el recorte que hizo Cavallo del 13% de los salarios y lo extiende a todo el ejercicio. En las partidas de educación no se contempla el pago del incentivo docente y se perpetúa el desfinanciamiento del PAMI y de los hospitales públicos. Pero como la devaluación ha iniciado un proceso inflacionario y la recaudación seguirá cayendo durante la recesión récord del semestre en curso, el recorte presupuestario del 2002 será muy superior a todo lo conocido. Por eso proponemos replantearlo por completo adaptándolo a los objetivos enunciados anteriormente: aumento salarial y seguro al desocupado financiado con el desconocimiento de la deuda y los impuestos al gran capital.

7) En medio del desangre económico que sufre el país, las empresas privatizadas continúan gozando de los grandes beneficios que le brindó su apropiación de los resortes estratégicos del proceso productivo. El impuesto a las compañías petroleras para socorrer a los bancos se mantiene tan indefinido y la renegociación de las tarifas de los servicios públicos ya quedó abierta durante el reciente tratamiento parlamentario del tema. Las compañías y sus representantes diplomáticos (desde embajadores hasta presidentes) ejercen una presión descarada para amortiguar las retenciones a las exportaciones petroleras, exigir seguros de cambios y compensaciones tarifarias. Pero la mentalidad colonial y la aceptación del trato servil ya es tan común entre los funcionarios, que nadie repudia esta ingerencia en las decisiones económicas del país.

Las compañías privatizadas no han abandonado su proyecto dolarizador para continuar remitiendo utilidades al exterior. Simplemente apuestan a reintroducirlo a otra paridad como en Ecuador luego de un caos inflacionario. Mientras preparan esta nueva versión de la convertibilidad, trabajan en lo inmediato en planes de indexación tarifaria.

Las nefastas consecuencias de las privatizaciones están a la vista. Las compañías lograron una inédita acumulación de beneficios a costa del resto del país. Adquirieron las empresas por sumas irrisorias, introdujeron inversiones mínimas en algunos sectores y vaciaron las empresas en otras ramas. Se apropiaron de la renta petrolera, destruyeron los ferrocarriles, liquidaron las aerolíneas, estafaron a los transportistas con los peajes, encarecieron los teléfonos, el agua y la electricidad. Cómo ya usufructuaron abusivamente de contratos fraudulentos, llegó la hora de poner fin a esta depredación para iniciar la reconstrucción económica del país.

Proponemos la reestatización de las empresas privatizadas sin ningún tipo de indemnización a fin de remodelar por completo su funcionamiento al servicio del país, abaratando las tarifas (actualmente impagables y en mora generalizada), asegurando la inversión y reciclando las ganancias y la renta dentro del circuito productivo nacional. La reestatización es indispensable, porque las empresas se especializan en burlar todas las formas de control y regulación de su actividad y porque resulta imposible desenvolver un plan económico popular sin el manejo estatal de las compañías estratégicas.

Para evitar el retorno a la experiencia pasada de burocratización, corrupción y enriquecimiento de grupos asociados a las empresas públicas, proponemos la introducción de nuevas formas de gestión democrática, basadas en la participación directa de los trabajadores y usuarios.

8) La depresión que soporta la economía argentina al cabo de ajustes que derivan en más ajustes, ya es superior al colapso del 30. Sólo en diciembre pasado el PBI industrial se derrumbó 18% en comparación al mismo mes del año anterior. Un plan de reactivación debe contemplar el objetivo prioritario de recuperar altas tasas de crecimiento en base a la reindustrialización y a la mejoría del consumo. El instrumento central para alcanzar estas metas es el rediseño del presupuesto nacional en condiciones de emergencia acordes a la catástrofe económica actual.

En esta planificación resulta vital un manejo centralizado del comercio exterior que permita incrementar el flujo de las divisas generadas por la exportaciones y asegure la selección de importaciones en función del objetivo reindustrializador y la mejoría del consumo popular. El endeudamiento masivo de los pequeños productores agropecuarios, las inundaciones y el deterioro ecológico demuestran que en la última década no sólo hubo apertura salvaje, sino también deterioro del perfil exportador cada vez más primarizado y favorable al pequeño grupo de corporaciones que manejan las ventas al exterior.

La devaluación no remedia la asfixia de los pequeños productores endeudados, ni asegura por sí misma una reactivación industrial. Por eso proponemos extender el esquema de impuestos progresivos a este sector, afectando principalmente a los grandes propietarios y a las compañías comercializadoras. Planteamos, además, la necesidad de un estricto monopolio estatal sobre todas las operaciones cambiarias para poner fin al contrabando y a los fraudes en la facturación del comercio exterior.

9) Un programa de crecimiento exige la reformulación total de la estructura impositiva, erradicando la escandalosa evasión de 20.000 millones de dólares al año y la increíble regresividad de todos los gravámenes. Resulta indispensable disponer la inmediata reducción de las tasas del IVA junto a medidas de desahogo impositivo para la pequeña industria, que permitan además la recuperación de las economías regionales. Se puede establecer una nueva cultura de cumplimiento impositivo si el principio de la progresividad rige efectivamente y los grandes evasores van presos. Planteamos la necesidad imprescindible de estimular la actividad cooperativa y las formas de producción solidarias y de intercambio que se han desarrollado recientemente en los sectores populares.

10) Las propuestas presentadas a través de este documento constituyen sólo un punto de partida para el Foro de Economistas de Izquierda que estamos promoviendo. Buscamos alentar la elaboración de programas concretos en cada uno de los temas genéricamente abordados este primer análisis.

Durante los últimos años de neoliberalismo, la profesión de los economistas quedó identificada con la actividad de los gurues, técnicos y hombres de negocios que aparecen en los medios de difusión para justificar los atropellos contra el pueblo. Nuestro foro se propone transformar por completo esta imagen, demostrando que existen economistas críticos del capitalismo, que trabajan en abierta oposición a las fundaciones de la clase dominante. Nos ubicamos junto a los reclamos de la clase media, las reivindicaciones de los trabajadores, las demandas de los piqueteros y la movilizaciones de la juventud, que han confluído en un proceso extraordinario de lucha que cambiará el futuro de la Argentina.

Imprecor 21 de enero 2002.

Claudio Katz
Guillermo Gigliani.
Jorge Marchini
Luis Becerra.